

No. 35943

**Spain
and
Morocco**

Convention on assistance to detained persons and the transfer of sentenced persons between the Kingdom of Spain and the Kingdom of Morocco. Madrid, 30 May 1997

Entry into force: *provisionally on 30 May 1997 by signature and definitively on 1 July 1999 by notification, in accordance with article 22*

Authentic texts: *Spanish, Arabic and French*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Spain, 5 August 1999*

**Espagne
et
Maroc**

Convention entre le Royaume d'Espagne et le Royaume du Maroc sur l'assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des personnes condamnées. Madrid, 30 mai 1997

Entrée en vigueur : *provisoirement le 30 mai 1997 par signature et définitivement le 1er juillet 1999 par notification, conformément à l'article 22*

Textes authentiques : *espagnol, arabe et français*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Espagne, 5 août 1999*

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

CONVENIO

**ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS
RELATIVO A LA ASISTENCIA A PERSONAS DETENIDAS
Y AL TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS**

El Reino de España
y
El Reino de Marruecos,

Animados por el deseo de favorecer la asistencia a sus nacionales que se encuentren detenidos en uno de ambos Estados;

Animados por el deseo de permitir a los condenados el cumplimiento de sus penas privativas de libertad en el Estado del que sean nacionales, con la finalidad de favorecer su reinserción social;

Han convenido en lo siguiente:

TÍTULO PRIMERO

ASISTENCIA DE LOS CÓNSULES A LAS PERSONAS DETENIDAS

Artículo primero

Siempre que el interesado no se oponga expresamente, las autoridades competentes de cada Estado informarán directamente al Cónsul competente de la detención, la encarcelación o cualquier otra forma de detención de que sea objeto un nacional del otro Estado, así como de los hechos que le sean imputados y de las disposiciones legales en que se fundamenten las actuaciones. Dicha información deberá proporcionarse tan pronto como sea posible.

Siempre que el interesado no se oponga expresamente, el Cónsul tendrá el derecho a visitar a cualquiera de sus nacionales que esté detenido, encarcelado o sometido a cualquier otra forma de detención o que cumpla una pena privativa de libertad en el Estado de residencia; a entrevistarse con él y a intercambiar correspondencia con el mismo, así como a velar por su representación ante la justicia. El derecho de visitar a dicho nacional se concederá al Cónsul tan pronto como sea posible y, lo más tarde, dentro de un plazo de ocho días a partir del día en que el interesado hubiera sido detenido, encarcelado o sometido a cualquier otra forma de detención. Las visitas se concederán con carácter periódico y a intervalos razonables.

Las autoridades competentes transmitirán sin demora al Cónsul la correspondencia y las comunicaciones de un nacional del otro Estado, detenido, encarcelado y sometido a cualquier otra forma de detención o que cumpla una pena privativa de libertad en el Estado de residencia.

Artículo 2

En caso de detención de un nacional de uno de los dos Estados debida a una infracción involuntaria cometida en el otro Estado, las autoridades competentes se esforzarán por adoptar, en el marco de su legislación, las disposiciones necesarias, en especial medidas de control judicial o la exigencia de una fianza, que permitan la puesta en libertad del interesado. El Cónsul competente será informado de las medidas de que haya sido objeto su nacional.

TÍTULO II

TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS DETENIDAS

Capítulo primero

Principios generales

Artículo 3

A efectos del presente Convenio:

a) por "Estado de condena" se entenderá el Estado en que la persona hubiera sido condenada y del que sea trasladada;

b) por "Estado de cumplimiento" se entenderá el Estado al que se traslade la persona condenada con el fin de cumplir su pena;

c) por "condenado detenido" se entenderá cualquier persona que, habiendo sido objeto en territorio de uno u otro Estado de una resolución judicial de culpabilidad, esté obligada a cumplir una pena privativa de libertad y se encuentre detenida.

Artículo 4

El presente Convenio se aplicará observando las condiciones siguientes:

- a) el delito que motive la solicitud deberá estar castigado por la legislación de cada uno de ambos Estados;
- b) la resolución judicial a que se refiere el artículo 3 deberá ser firme y tener carácter ejecutivo;
- c) el condenado detenido deberá ser nacional del Estado al que se le traslade;
- d) el condenado o su representante legal, en razón de su edad o estado físico o mental, deberá prestar su consentimiento;
- e) el Estado de condena y el Estado de cumplimiento deberán estar de acuerdo sobre el traslado.

Artículo 5

Las autoridades competentes del Estado de condena informarán a todo nacional del otro Estado, condenado por sentencia firme, acerca de la posibilidad que se le ofrece, en aplicación del presente Convenio, de obtener su traslado a su país de origen para el cumplimiento de su pena.

Artículo 6

Se denegará el traslado del condenado:

- a) si la sanción ha prescrito según la legislación de uno de ambos Estados;
- b) si el condenado tiene la nacionalidad del Estado de condena.

Artículo 7

Podrá denegarse el traslado en el caso de que:

- a) el delito consista únicamente en la violación de obligaciones militares;
- b) la condena que motive la solicitud esté basada en hechos sobre los que haya recaído sentencia firme en el Estado de cumplimiento;
- c) las autoridades competentes del Estado de cumplimiento hubieran decidido no iniciar actuaciones o poner fin a las actuaciones que hubieran iniciado por los mismos hechos;
- d) los hechos que hayan motivado la condena sean objeto de actuaciones en el Estado de cumplimiento;

e) el condenado no hubiera satisfecho los importes, multas, gastos judiciales, indemnizaciones por daños y perjuicios y condenas pecuniarias de cualquier naturaleza que se le hayan impuesto;

f) El Estado requerido considere que el traslado pueda perjudicar su soberanía, su seguridad, su orden público, los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico u otros de sus intereses esenciales.

Artículo 8

El Estado de cumplimiento sustituirá, cuando proceda, la sanción impuesta por el Estado de condena, por la pena o la medida prevista por su propia legislación para un delito análogo. Informará de ello al Estado de condena, siempre que sea posible, antes de la aceptación de la solicitud de traslado. Dicha pena o medida corresponderá, en la medida de lo posible, en cuanto a su naturaleza, a la impuesta por la resolución objeto de cumplimiento. No podrá agravar por su carácter o por su duración la sanción dictada en el Estado de condena, ni exceder del máximo previsto por la legislación del Estado de cumplimiento.

Artículo 9

El Estado de condena informará sin demora al Estado de cumplimiento de cualquier resolución o de cualquier acto procesal que se haya producido en su territorio y que ponga fin al derecho de cumplimiento.

Las autoridades competentes del Estado de cumplimiento deberán poner fin al cumplimiento de la pena en cuanto sean informados de cualquier resolución o medida que tenga por efecto privar a la sanción de su carácter ejecutivo.

Artículo 10

Sólo el Estado de condena tendrá el derecho a resolver sobre cualquier recurso de revisión interpuesto contra la condena.

Artículo 11

El cumplimiento de penas privativas de libertad se regirá por la legislación del Estado de cumplimiento con observancia de las condiciones previstas en los artículos siguientes.

Artículo 12

En el momento de la solicitud de traslado el condenado deberá tener pendiente al menos un año de pena por cumplir. En casos excepcionales, ambos Estados podrán autorizar el traslado aún cuando la pena que reste por cumplir sea inferior a un año.

Artículo 13

El cumplimiento de la pena privativa de libertad definida en la letra c) del artículo 3 se regirá por la legislación del Estado de cumplimiento.

Éste será el único competente para adoptar, respecto al condenado, resoluciones sobre reducción de la pena y, de modo más general, para determinar las modalidades de cumplimiento de la pena.

Artículo 14

Los gastos de traslado correrán a cargo del Estado que solicita el traslado, salvo acuerdo en contrario entre ambos Estados. El Estado que asuma los gastos de traslado proporcionará la escolta.

Capítulo segundo

Procedimiento

Artículo 15

La solicitud de traslado podrá ser presentada:

a) por el propio condenado o su representante legal, quien presentará, a dicho efecto, una solicitud a uno de ambos Estados;

b) por el Estado de condena;

c) o por el Estado de cumplimiento.

Artículo 16

Cualquier solicitud deberá formularse por escrito. En ella se indicará la identidad del condenado y su lugar de residencia en el Estado de condena y en el Estado de cumplimiento. Irá acompañada de una declaración hecha ante una autoridad judicial en que se haga constar el consentimiento del condenado.

Artículo 17

El Estado de condena remitirá al Estado de cumplimiento el original o una copia auténtica de la resolución por la que se haya condenado a la persona, provista de una certificación del carácter ejecutivo de la resolución y precisará, en la medida de lo posible, las circunstancias del delito, la fecha y el lugar donde hubiera sido cometido, su calificación legal y la duración de la sanción que deba cumplirse. Proporcionará toda la información necesaria acerca de la persona condenada y su conducta en el Estado de condena antes y después de dictarse la resolución de condena.

Si uno de ambos Estados considera que la información proporcionada por el otro Estado es insuficiente para poder aplicar el presente Convenio, solicitará la información complementaria necesaria.

El condenado deberá ser informado por escrito de cualquier gestión emprendida por el Estado de condena o del Estado de cumplimiento, en aplicación de los párrafos precedentes, así como de cualquier decisión adoptada por uno de ambos Estados acerca de una solicitud de traslado.

Artículo 18

Excepto en casos excepcionales, las solicitudes serán dirigidas por el Ministerio de Justicia del Estado requirente al Ministerio de Justicia del Estado requerido. Las respuestas se transmitirán por el mismo conducto en los plazos más breves posibles.

Toda denegación deberá estar motivada.

Artículo 19

Cada uno de los dos Estados podrá reservarse la facultad de exigir que las solicitudes y los documentos anejos a las mismas le sean enviados acompañados de una traducción en su propia lengua.

Artículo 20

Las piezas y documentos transmitidos en aplicación del presente Convenio estarán dispensados de toda formalidad en cuanto a su legalización.

Artículo 21

El Estado de cumplimiento no podrá reclamar en ningún caso el reembolso de los gastos en que hubiere incurrido para el cumplimiento de la pena y la vigilancia del condenado.

TÍTULO III

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 22

El presente Convenio entrará en vigor provisionalmente a partir de la fecha de su firma y definitivamente el primer día del segundo mes siguiente a la fecha de la última notificación en la que se haga constar el cumplimiento de las formalidades constitucionales requeridas en cada uno de ambos Estados.

Artículo 23

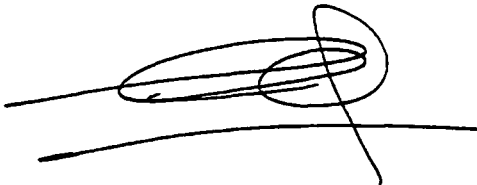
El presente Convenio se concluye por un tiempo de duración indefinida. Cada uno de los dos Estados podrá denunciarlo mediante una notificación por escrito enviada al otro Estado por conducto diplomático.

La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha de su envío.

EN FE DE LO CUAL, los representantes de ambos Estados, autorizados al efecto, firman el presente Convenio y estampan en el mismo su sello.

HECHO en Madrid, el 30 de Mayo de 1997, por duplicado, en lenguas española, árabe y francesa, siendo igualmente auténticos los tres textos.

POR EL REINO DE ESPAÑA



Margarita Mariscal de Gante y Mirón

Ministra de Justicia

POR EL REINO DE MARRUECOS



Abderrahmane Amalou

Ministro de Justicia

القسم الثالث

مقتضيات ختامية

المادة الثانية والعشرون

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مؤقتا بمجرد التوقيع عليها ونهائيا اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ آخر تبليغ يشهد باستيفاء الاجراءات الدستورية المتطلبية في كل من الدولتين .

المادة الثالثة والعشرون

أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ، ويمكن لكل من الدولتين ان تعلن عن رغبتها في الغائها باشعار مكتوب يوجه بالطرق الدبلوماسية الى الدولة الأخرى .
ويسري مفعول هذا الاتفاق بعد مرور سنة من تاريخ توجيه .

واثباتا لذلك وقع ممثلتا الدولتين المأذون لهما بذلك على هذه الاتفاقية ووضعا طابعهما
عليهما

وحررت..... في..... في نظيرين أصليين باللغات
العربية و الاسبانية والفرنسية ، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية .

انان .

عن المملكة المغربية
عبد الرحمن انان

من المملكة الاسبانية
Despote Decal de jant

ومكان اقتراحها ووصفها القانوني ، ومدة العقوبة الواجب تنفيذها ، كما تدلي بجميع المعلومات الضرورية عن شخصية المحكوم عليه وسيرته في دولة الادانة قبل الحكم وبعبه .

إذا ارتأت احدى الدولتين ان المعلومات المقدمة لها من الدولة الاخرى غير كافية لتطبيق الاتفاقية فعليها أن تطلب الادلاء بالمعلومات التكميلية الضرورية .
يجب إخبار المحكوم عليه كتابة بكل الخطوات المتخذة من طرف دولة الادانة او دولة التنفيذ تطبيقا لمقتضيات الفقرات السابقة ، وكذا بكل قرار اتخذ من طرف احدى الدولتين في موضوع طالنقل .

المادة الثامنة عشرة

توجه الطلبات ، ما عدا في الحالات الاستثنائية ، من وزارة عدل الدولة الطالبة الى وزارة عدل الدولة المطلوبة وترسل الاجوبة في أقصر الأجال بنفس الكيفية .
ويعلل كل رفض .

المادة التاسعة عشرة

يحق لكل من الدولتين ان تحتفظ بامكانية مطالبة الدولة الاخرى بتوجيه الطلبات والوثائق المرفقة مصحوبة بالترجمة للغتها الاصلية ..

المادة العشرون

تعفى من إجراءات التصديق الوثائق والمستندات التي يقع ارسالها تطبيقا لهذه الاتفاقية .

المادة الواحدة والعشرون

لا يمكن باي حال لدولة التنفيذ المطالبة باسترجاع المصاريف التي انفقتها لتنفيذ العقوبة وحراسة المحكوم عليه .

المادة الثالثة عشرة

يخضع تنفيذ العقوبة السالبة للحرية الوارد تعريفها في الفقرة (ج) من الفصل الثالث لقانون دولة التنفيذ ، وتختص هذه الاخيرة وحدها ، ازاء المحكوم عليه ، باتخاذ قرارات بتخفيض العقوبة المذكورة كما تختص بصفة عامة بتحديد كيفية تنفيذها .

المادة الرابعة عشرة

تتحمل الدولة طالبة النقل مصاريف النقل عدا اذا تقرر خلاف ذلك من طرف الدولتين والدولة التي تتحمل مصاريف نقل المعتقل هي التي تعين الاشخاص المكلفين بحراسته .

الباب الثاني

المسطرة

المادة الخامسة عشرة

يمكن تقديم طلب النقل من طرف :

- أ - المحكوم عليه نفسه او بواسطة ممثله القانوني بعرضة ترفع الى إحدى الدولتين .
- ب - دولة الادانة .
- ج - دولة التنفيذ .

المادة السادسة عشرة

يقدم الطلب كتابة ، وتبين فيه هوية المحكوم عليه ومحل إقامته في دولة الادانة ودولة التنفيذ ويرفق بتصريح تتلقاه السلطة القضائية يثبت فيه موافقة المحكوم عليه .

المادة السابعة عشرة

ترجع دولة الادانة الى دولة التنفيذ اصل الحكم أو نسخة مطابقة منه القاضي بادانة المحكوم عليه ، وتشهد دولة الادانة بكون الحكم قابلاً للتنفيذ مع تبيان قدر الامكان ظروف الجريمة وزمان

المادة الثامنة

يمكن لدولة التنفيذ عند الاقتضاء، ان تستبدل العقوبة المحكوم بها من طرف دولة الادانة بعقوبة او تدبير منصوص عليهما في قانونها بالنسبة لجريمة ماثلة. وفي هذه الحالة تخبر دولة الادانة جهد الامكان قبل قبول طلب النقل .

ويجب ان تطابق هذه العقوبة او التدبير قدر الامكان العقوبة الصادرة عن دولة الادانة من حيث طبيعتها . ولا يمكن لهذه العقوبة او التدبير ان يؤدي من حيث طبيعتهما او مدتهما الى تشديد العقوبة الصادرة عن دولة الادانة ولا ان يتجاوزا الحد الاقصى المنصوص عليه في قانون دولة التنفيذ .

المادة التاسعة

تشعر دولة الادانة بدون تأخير دولة التنفيذ بكل حكم او إجراء مسطري صادر فوق ترابها يضع حدا للتنفيذ .

تضع السلطات المختصة بدولة التنفيذ حدا لتنفيذ العقوبة بمجرد اشعارها بكل حكم او إجراء . يجرى العقوبة من صبغتها التنفيذية .

المادة العاشرة

يحق لدولة الادانة وحدها ان تبث في طلب المراجعة الصادر ضد الادانة .

المادة الهادية عشرة

يخضع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية لقانون دولة التنفيذ مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية .

المادة الثانية عشرة

يجب ألا تقل مدة العقوبة المتبقية عند تقديم طلب النقل عن سنة ويمكن في حالات استثنائية للدولتين الترخيص بالنقل رغم ان المدة تقل عن سنة .

الصحة او العقلية .

هـ - يجب ان يحظى هذا النقل بقبول كل من دولة الادانة ودولة التنفيذ .

المادة الخامسة

يجب على السلطات المختصة لدولة الادانة ان تشعر كل محكوم عليه انتهائيا من رعايا الدولة الاخرى بما تخوله هذه الاتفاقية من امكانية نقله الى بلده الاصلي لتنفيذ العقوبة .

المادة السادسة

يرفض طلب نقل المحكوم عليه :

- ا- اذا تقادمت العقوبة بمقتضى قانون احدى الدولتين .
- ب - اذا كان المحكوم عليه ينتمي الى دولة الادانة .

المادة السابعة

يمكن رفض طلب النقل :

- أ- إذا كانت الجريمة تنحصر فقط في خرق التزامات عسكرية .
- ب - إذا كانت الادانة التي يستند عليها الطلب مبنية على وقائع سبق الحكم فيها انتهائيا من طرف دولة التنفيذ.
- ج - إذا قررت السلطات المختصة لدولة التنفيذ عدم اجراء أية متابعة او قررت جعل حد المتابعة سبق تحريكها من أجل نفس الوقائع .
- د - إذا كانت الوقائع التي استندت عليها الادانة موضوع متابعات في دولة التنفيذ .
- هـ - إذا لم يسدد المحكوم عليه ما بذمته من مبالغ مالية ، وغرامات ، ومصاريف قضائية ، وتعويضات ، وعقوبات مالية كيف ما كان نوعها التي حكم عليه بأدائها .
- و - إذا اعتبرت الدولة المطلوبة ان هذا النقل من شأنه ان يمس بسيادتها او بأمنها او بنظامها العام او بالمبادئ الاساسية لنظامها القانوني او بغير ذلك من مصالحها الاساسية .

[ARABIC TEXT — TEXTE ARABE]

اتفاقية تتعلق بمساعدة الاشخاص المعتقلين ونقل المحكوم عليهم الى وطنهم
بين المملكة الاسبانية والمملكة المغربية

ان المملكة المغربية و المملكة الاسبانية ،

حرصا منهما على تمتين المساعدة المبذولة لفائدة رعاياها المرجوذين رهن الاعتقال باحدى

الدولتين ،

ورغبة منهما في تمكين المحكوم عليهم بعقوبة سالية للحرية من قضائهم لها داخل وطنهم ،

بغية تسهيل اعادة اندماجهم في مجتمعهم .

انتقلا على مقتضيات التالية :

القسم الاول

مساعدة القناصل للمعتقلين

المادة الاولى

تقوم السلطات المختصة بكل من الدولتين باشعار القنصل المختص مباشرة بالقاء القبض
على أحد رعايا الدولة الاخرى ، او اعتقاله ، او استهدافه لاي نوع آخر من انواع الاعتقال ، وكذا
بالوقائع المنسوبة اليه ، والمقتضيات القانونية التي اسست عليها متابعتة ما لم يعترض المعني
بالامر على ذلك صراحة . ويتم هذا الاشعار في أقرب وقت ممكن .

بحق للقنصل مالم يعترض المعني بالامر على ذلك صراحة زيارة من يوجد من رعايا الدولة
التي يمثلها مقبوضا كان او معتقلا ، او مستهدفا لاي نوع آخر من انواع الاعتقال ، او يقضي عقوبة
سالية للحرية في الدولة التي يقيم بها ، وبحق له التحدث اليه ومكاتبته والسهر على تعيين من
يؤازره امام القضا ، على ان يمكن القنصل من رخصة الزيارة في اقرب وقت ، وعلى أكثر تقدير قبل
انتهاء ثمانية ايام تبتدئ من يوم القبض أو الاعتقال أو الاستهداف لأي نوع من أنواع الاعتقال
ويرخص له في هذه الزيارات دوريا وخلال فترات معقولة .

توجه السلطات المختصة بدون تأخير الى القنصل المراسلة والاشعارات الصادرة عن أحد
رعايا الدولة الاخرى مقبوضا كان او معتقلا او مستهدفا لاي نوع من أنواع الاعتقال ، أو يقضي

[FRENCH TEXT — TEXTE FRANÇAIS]

CONVENTION ENTRE LE ROYAUME D'ESPAGNE ET LE ROYAUME DU
MAROC SUR L'ASSISTANCE AUX PERSONNES DÉTENUES ET SUR
LE TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES

Le Royaume d'Espagne et

Le Royaume du Maroc

Soucieux de renforcer l'assistance à leurs ressortissants qui se trouvent détenus dans l'un des deux Etats;

Désireux de permettre aux condamnés de purger leur peine privative de liberté dans le pays dont ils sont ressortissants, afin de faciliter leur réinsertion sociale;

Sont convenus des dispositions suivantes

TITRE PREMIER. ASSISTANCE DES CONSULS AUX PERSONNES DÉTENUES

Article premier

Sauf si l'intéressé s'y oppose expressément, les autorités compétentes de chaque Etat informent directement le Consul compétent de l'arrestation, de l'incarcération ou de toute autre forme de détention dont fait l'objet un ressortissant de l'autre Etat ainsi que des faits qui lui sont imputés et des dispositions légales fondant les poursuites. Cette information doit être donnée aussitôt que possible.

Sauf si l'intéressé s'y oppose expressément, le Consul a le droit de se rendre auprès d'un de ses ressortissants qui est arrêté, incarcéré ou soumis à toute autre forme de détention ou qui purge une peine privative de liberté dans l'Etat de résidence, de s'entretenir et correspondre avec lui, ainsi que de pourvoir à sa représentation en justice. Le droit de se rendre auprès de ce ressortissant est accordé au Consul aussitôt que possible et, au plus tard, avant l'expiration d'un délai de huit jours à compter du jour où l'intéressé a été arrêté, incarcéré ou soumis à toute autre forme de détention. Les visites sont accordées périodiquement et à des intervalles raisonnables.

Les autorités compétentes transmettent sans retard au Consul la correspondance et les communications d'un ressortissant de l'autre Etat, arrêté, incarcéré ou soumis à toute autre forme de détention ou qui purge une peine privative de liberté dans l'Etat de résidence.

Article 2

En cas d'arrestation d'un ressortissant de l'un des deux Etats pour une infraction involontaire commise dans l'autre Etat, les autorités compétentes s'efforceront dans le cadre de leur législation, de prendre les dispositions nécessaires, notamment des mesures de contrôle judiciaire ou l'exigence d'une caution, permettant la mise en liberté de l'intéressé. Le consul compétent sera informé des mesures dont son ressortissant aura fait l'objet.

TITRE II. TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES DÉTENUES

CHAPITRE PREMIER. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 3

Au sens de la présente Convention :

- a) L'expression " Etat de condamnation " désigne l'Etat où la personne a été condamnée et d'où elle est transférée;
- b) L'expression " Etat d'exécution " désigne l'Etat vers lequel la personne condamnée est transférée afin de subir sa peine;
- c) Le terme " condamné détenu " désigne toute personne qui, ayant fait l'objet sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat d'une décision judiciaire de culpabilité, est astreinte à subir une peine privative de liberté et se trouve en détention.

Article 4

La présente Convention s'applique dans les conditions suivantes :

- a) L'infraction qui motive la demande doit être réprimée par la législation de chacun des deux Etats;
- b) La décision judiciaire visée à l'article 3 doit être définitive et exécutoire;
- c) Le condamné détenu doit être un ressortissant de l'Etat vers lequel il sera transféré;
- d) Le condamné ou son représentant légal en raison de son âge ou son état physique ou mental doit être consentant;
- e) L'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution doivent s'être mis d'accord sur ce transfert;

Article 5

Les autorités compétentes de l'Etat de condamnation informent tout ressortissant de l'autre Etat, condamné définitivement, de la possibilité qui lui est offerte, en application de la présente Convention, d'obtenir son transfert dans son pays d'origine pour l'exécution de sa peine.

Article 6

Le transfert du condamné sera refusé :

- a) Si la prescription de la sanction est acquise d'après la loi de l'un des deux Etats;
- b) Si le condamné a la nationalité de l'Etat de condamnation.

Article 7

Le transfert pourra être refusé :

- a) Si l'infraction consiste uniquement dans la violation d'obligations militaires;
- b) Si la condamnation qui motive la demande est fondée sur des faits qui ont été jugés définitivement dans l'Etat d'exécution;
- c) Si les autorités compétentes de l'Etat d'exécution ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour les mêmes faits;
- d) Si les faits qui ont motivé la condamnation font l'objet de poursuites dans l'Etat d'exécution;
- e) Si le condamné ne s'est pas acquitté des sommes, amendes, frais de justice, dommages-intérêts et condamnations pécuniaires de toute nature mises à sa charge.
- f) Si le transfèrement est considéré par l'Etat requis comme étant de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public, aux principes fondamentaux de son ordre juridique ou à ses autres intérêts essentiels.

Article 8

L'Etat d'exécution substitue, s'il y a lieu, à la sanction infligée par l'Etat de condamnation, la peine ou la mesure prévue par sa propre loi pour une infraction analogue. Il en informe l'Etat de condamnation, autant que faire se peut, avant l'acceptation de la demande d'acheminement. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la décision à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l'Etat de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat d'exécution.

Article 9

L'Etat de condamnation informe sans délai l'Etat d'exécution de toute décision ou de tout acte de procédure intervenu sur son territoire qui met fin au droit d'exécution.

Les autorités compétentes de l'Etat d'exécution doivent mettre fin à l'exécution de la peine dès qu'elles ont été informées de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la sanction son caractère exécutoire.

Article 10

L'Etat de condamnation, seul, a le droit de statuer sur tout recours en révision introduit contre la condamnation.

Article 11

L'exécution des peines privatives de liberté est régie par la loi de l'Etat d'exécution sous les conditions prévues aux articles suivants.

Article 12

Au moment de la demande de transfèrement, le condamné doit avoir encore au moins un an de peine à exécuter. Dans des cas exceptionnels, les deux Etats peuvent autoriser le transfèrement même si le reliquat de peine est inférieur à un an.

Article 13

L'exécution d'une peine privative de liberté définie au paragraphe (c) de l'article 3 est régie par la loi de l'Etat d'exécution.

Celui-ci seul compétent pour prendre, à l'égard du condamné, les décisions de réduction de peine, et plus généralement, pour déterminer les modalités d'exécution de la peine.

Article 14

Les frais de transfèrement sont à la charge de l'Etat qui demande le transfèrement, sauf s'il en est décidé autrement par les deux Etats. L'Etat qui assume les frais de transfèrement fournit l'escorte.

CHAPITRE II. PROCÉDURE

Article 15

La demande de transfèrement peut être présentée :

- a) Soit par le condamné lui-même ou son représentant légal qui présente, à cet effet, une requête à l'un des deux Etats;
- b) Soit par l'Etat de condamnation;
- c) Soit par l'Etat d'exécution.

Article 16

Toute demande est formulée par écrit. Elle indique l'identité du condamné, son lieu de résidence dans l'Etat de condamnation et dans l'Etat d'exécution. Elle est accompagnée d'une déclaration recueillie par une autorité judiciaire constatant le consentement du condamné.

Article 17

L'Etat de condamnation adresse à l'Etat d'exécution l'original ou une copie authentique de la décision condamnant la personne. Il certifie le caractère exécutoire de la décision et il précise, dans toute la mesure du possible, les circonstances de l'infraction, le temps et le lieu où elle a été

commise, sa qualification légale et la durée de la sanction à exécuter. Il fournit tous renseignements nécessaires sur la personne du condamné et sa conduite dans l'Etat de condamnation avant et après le prononcé de la décision de condamnation.

Si l'un des deux Etats estime que les renseignements fournis par l'autre Etat sont insuffisants pour lui permettre d'appliquer la présente convention, il demande le complément d'information nécessaire.

Le condamné doit être informé par écrit de toute démarche entreprise par l'Etat de condamnation ou l'Etat d'exécution, en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l'un des deux Etats au sujet d'une demande de transfèrement.

Article 18

Sauf cas exceptionnels, les demandes sont adressées par le Ministère de la Justice de l'Etat requérant au Ministère de la Justice de l'Etat requis. Les réponses sont transmises par la même voie dans les meilleurs délais.

Tout refus sera motivé.

Article 19

Chacun des deux Etats pourra se réserver la faculté d'exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées accompagnées d'une traduction dans sa propre langue.

Article 20

Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toute formalité de légalisation.

Article 21

L'Etat d'exécution ne peut en aucun cas réclamer le remboursement des frais engagés par lui pour l'exécution de la peine et la surveillance du condamné.

TITRE III. DISPOSITIONS FINALES

Article 22

La présente Convention entrera en vigueur provisoirement à compter de la date de sa signature, et définitivement le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification attestant l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises dans chacun des deux pays.

Article 23

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Chacun des deux Etats peut la dénoncer au moyen d'une notification écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Etat.

La dénonciation prendra effet un an après la date de son envoi.

En foi de quoi les représentants des deux Etats autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau. Fait à Madrid le 30 mai 1997, en double exemplaire, en langue arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.

Pour le Royaume d'Espagne :

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN
Ministre de Justice

Pour le Royaume du Maroc :

ABDERRAHMANE AMALOU
Ministre de Justice

[TRANSLATION - TRADUCTION]

CONVENTION ON ASSISTANCE TO DETAINED PERSONS AND THE
TRANSFER OF SENTENCED PERSONS BETWEEN THE KINGDOM OF
SPAIN AND THE KINGDOM OF MOROCCO

The Kingdom of Spain and the Kingdom of Morocco,

Motivated by the desire to promote assistance to their nationals who are detained in one of the two States,

Motivated by the desire to enable sentenced persons to serve their sentences involving deprivation of liberty in the State of which they are nationals, with the objective of promoting their social resettlement,

Have agreed as follows:

TITLE I. CONSULAR ASSISTANCE TO DETAINED PERSONS

Article 1

Provided the person concerned does not expressly object, the competent authorities of either State shall directly inform the competent consul of the arrest, imprisonment or other form of detention imposed on a national of the other State, and of the acts of which that person is accused and of the legal provisions on which the proceedings are based. Such information shall be provided as soon as possible.

Provided the person concerned does not expressly object, the consul shall be entitled to visit any of his or her nationals who is arrested, imprisoned or subjected to any other form of detention or who is serving a sentence involving deprivation of liberty in the State of residence, to meet and exchange correspondence with that person and to ensure that he or she is represented in legal proceedings. The right to visit the said national shall be accorded to the consul as promptly as possible and, at the latest, within eight days from the day on which the person concerned was arrested, imprisoned or subjected to any other form of detention. The visits shall be granted periodically and at reasonable intervals.

The competent authorities shall, without delay, transmit to the consul the correspondence and communications from a national of the other State who is arrested, imprisoned or subjected to any other form of detention or who is serving a sentence involving deprivation of liberty in the State of residence.

Article 2

In the event of the arrest of a national of either State by reason of an unintentional offence committed in the other State, the competent authorities shall endeavour to take the necessary steps under their laws, particularly measures of judicial control or the requirement of a surety, so as to enable the person concerned to be released. The competent consul shall be informed of the measures taken in respect of his or her national.

TITLE II. TRANSFER OF SENTENCED PERSONS HELD IN CUSTODY

CHAPTER I. GENERAL PRINCIPLES

Article 3

For the purposes of this Convention:

- (a) "Sentencing State" shall mean the State in which the person has been sentenced and from which he or she is to be transferred;
- (b) "Enforcing State" shall mean the State to which the person sentenced is transferred for the purpose of serving his or her sentence;
- (c) "Sentenced person in custody" shall mean any person who, having been the subject in the territory of either State of a judicial finding of guilty, is obliged to serve a sentence involving deprivation of liberty and who is in custody.

Article 4

This Convention shall apply on condition that:

- (a) The offence that gives rise to the request is punishable under the laws of both States;
- (b) The sentence referred to in article 3 is final and has executive force;
- (c) The sentenced person is a national of the State to which he or she is to be transferred;
- (d) The sentenced person or, by reason of age or physical or mental condition, that person's legal representative, gives his or her consent;
- (e) The sentencing State and the enforcing State agree on the transfer.

Article 5

The competent authorities of the sentencing State shall inform any national of the other State who has received a final sentence of the option available to that person under this Convention of being transferred to his or her country of origin to serve the sentence.

Article 6

The transfer of the sentenced person shall be refused:

- (a) If the time limit for enforcement of the penalty has expired under the laws of either State;
- (b) If the sentenced person is of the nationality of the sentencing State.

Article 7

The transfer may be denied in the event that:

- (a) The offence consists only in a violation of military service obligations;

(b) The sentence that gives rise to the request is based on acts in respect of which a final sentence has been passed in the enforcing State;

(c) The competent authorities of the enforcing State have decided either not to institute proceedings or to terminate proceedings already instituted in respect of the same acts;

(d) The acts that gave rise to the sentence are the subject of proceedings in the enforcing State;

(e) The sentenced person has not paid the charges, fines, judicial costs, compensation for loss or damage, or financial penalties of any kind that have been imposed on him or her;

(f) The requested State considers that the transfer may prejudice its sovereignty, security, public order, the fundamental principles of its legal order or other essential interests.

Article 8

The enforcing State shall, where appropriate, replace the penalty imposed by the sentencing State by the punishment or measure provided by its own laws for a similar offence. It shall inform the sentencing State thereof, whenever possible, prior to acceptance of the request for transfer. The said punishment or measure shall, as far as possible, be consistent in kind with that imposed by the decision to be enforced. It may not increase in kind or duration the penalty imposed in the sentencing State, nor exceed the maximum provided for in the laws of the enforcing State.

Article 9

The sentencing State shall without delay inform the enforcing State of any decision or proceedings that have occurred in its territory and which terminate the right of enforcement.

The competent authorities of the enforcing State shall terminate the enforcement of the sentence as soon as they are informed of any decision or measure which has the effect of depriving the penalty of its executive force.

Article 10

Only the sentencing State shall be entitled to rule on any application for review of the sentence.

Article 11

The enforcement of sentences involving deprivation of liberty shall be governed by the laws of the enforcing State in compliance with the conditions set forth in the articles below.

Article 12

At the time of the request for transfer, at least one year of the sentenced person's penalty must remain to be served. In exceptional cases, the two States may authorize the transfer even when less than one year of the penalty remains to be served.

Article 13

The enforcement of the sentence involving deprivation of liberty defined in article 3 (c) shall be governed by the laws of the enforcing State.

The enforcing State alone shall be competent to adopt decisions, with respect to the sentenced person, concerning the reduction of the sentence and, more generally, to determine the procedures for enforcement of the sentence.

Article 14

The transfer costs shall be borne by the State requesting the transfer, except where otherwise decided by the two States. The State that bears the transfer costs shall provide an escort.

CHAPTER II. PROCEDURE

Article 15

The request for transfer may be submitted:

- (a) By the sentenced person or his or her legal representative, who shall submit, for that purpose, a request to one of the two States;
- (b) By the sentencing State;
- (c) Or by the enforcing State.

Article 16

Any request shall be made in writing. It shall indicate the identity of the sentenced person and his or her place of residence in the sentencing State and in the enforcing State. A declaration made before a judicial authority certifying the consent of the sentenced person shall be attached to the request.

Article 17

The sentencing State shall transmit to the enforcing State the original, or an authentic copy, of the decision by which the person has been sentenced, together with a certification of the executive force of the decision and shall, as far as possible, specify the circumstances of the offence, the date and place where it was committed, its legal description and the duration of the sentence to be executed. It shall provide all necessary information concerning

the sentenced person and his or her conduct in the sentencing State prior to and since the passing of sentence.

If either State considers that the information provided by the other State is inadequate for purposes of the application of this Convention, it shall request the necessary additional information.

The sentenced person shall be informed in writing of any action undertaken by the sentencing State or the enforcing State in application of the preceding paragraphs, as well as of any decision taken by one of the two States concerning a request for transfer.

Article 18

Save in exceptional cases, requests shall be addressed by the Ministry of Justice of the requesting State to the Ministry of Justice of the requested State. Replies shall be communicated through the same channel as promptly as possible.

Any refusal shall be accompanied by a statement of reasons.

Article 19

Either State may reserve the right to require that requests and the documents annexed thereto be sent to it together with a translation into its own language.

Article 20

The papers and documents transmitted in compliance with this Convention shall be exempted from all formalities regarding their legalization.

Article 21

The enforcing State may in no case claim reimbursement of costs incurred by it for the enforcement of the sentence or the supervision of the sentenced person.

TITLE III. FINAL PROVISIONS

Article 22

This Convention shall enter into force provisionally on the date of its signature and definitively on the first day of the second month following the date of the last notification of compliance with the constitutional formalities required in each of the two States.

Article 23

This Convention is concluded for an indefinite period. Either State may denounce it by giving notice in writing to the other State through the diplomatic channel.

Such denunciation shall take effect one year following the date on which it is sent.

In witness whereof the representatives of the two States, being duly authorized thereto, sign this Convention and thereto affix their seals. Done at Madrid on 30 May 1997 in duplicate in the Spanish, Arabic and French languages, all three texts being equally authentic.

For the Kingdom of Spain:

MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN
Minister of Justice

For the Kingdom of Morocco:

ABDERRAHMANE AMALOU
Minister of Justice